

La COP30 y el dilema brasileño

GABRIELLA LIMA :: 21/11/2025

Brasil presenta una iniciativa que monetizará los bosques y está dando los últimos toques a un controvertido megaproyecto para explotar el petróleo en la desembocadura del Amazonas

En la Conferencia del Clima de Belém (COP30), en la Amazonía brasileña, su presidente André Corrêa do Lago promete que la «transición justa y equitativa» estará en el centro de las discusiones. Una transición que pone en el centro la justicia social, el desarrollo sostenible y la creación de empleos verdes, «sin dejar a nadie atrás». Estas promesas son necesarias para preservar la credibilidad de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del país anfitrión de la COP30, a un año de las elecciones presidenciales. Pero las iniciativas brasileñas ponen al descubierto las contradicciones entre un fuerte discurso ambientalista y políticas que priorizan los intereses de las industrias de combustibles fósiles y los mercados financieros.

La financiación climática se está apoderando de los bosques

La gran propuesta de Brasil en la COP es el Fondo para los Bosques Tropicales (TFFF), que tiene como objetivo capitalizar la crisis climática convirtiendo los bosques en activos financieros generadores de ganancias.

¿Cómo? A través de la creación de un fondo de inversión que generaría una ganancia anual de 4 mil millones de dólares. Parte de estos rendimientos se utilizarían para remunerar anualmente a los países que preservan sus bosques tropicales por una suma de 4 dólares por hectárea. La lógica no es muy diferente a la de los bancos: se trata de pedir dinero prestado a un tipo de interés bajo, prestarlo después a un tipo más alto y destinar los beneficios a la remuneración de la conservación. Para ello, el TFFF tendría que recaudar 125 mil millones de dólares USA, el 20% de filantropía y patrocinadores gubernamentales, y el 80% de los mercados privados, incluidos los fondos de pensiones y las compañías de seguros, mediante la emisión de instrumentos de **deuda** como bonos «verdes» o «azules». Por lo tanto, se trata de préstamos y no de subvenciones.

El TFFF responde al imperativo del capitalismo verde de transformar todo lo que aún no está mercantilizado. Su objetivo es rellenar los vacíos en mecanismos como REDD+, financiando todos los servicios relacionados con la conservación de los bosques en lugar de evitar solamente las emisiones de carbono. En teoría, se deberían pagar 4.000 millones de dólares para la conservación, pero todavía no hay garantía de que el fondo logre recaudar los 125.000 millones de dólares previstos, ni de que los 4.000 millones de dólares por hectárea se paguen a los países asociados. Los rendimientos generados tendrán que cubrir, en orden, los intereses de los inversores y los costes administrativos antes de sustentar la conservación.

Los bosques solo recibirán lo que quede y la cantidad asignada dependerá del rendimiento

financiero del fondo. Si la tasa de rendimiento es inferior al 7,5% o si no se alcanza el objetivo de 125 mil millones, los pagos dedicados a la conservación se reducirán proporcionalmente. El panorama no es alentador, ya que incluso los arquitectos del proyecto estiman un riesgo del 60% de no poder pagar las sumas prometidas. Peor aún, el borrador no define quién es responsable de la deuda en caso de que los inversores no recuperen sus intereses. Esta incertidumbre plantea la amenaza de un aumento de la deuda externa de los países con bosques tropicales.

Instrumentalización de los Pueblos Autóctonos

Como país anfitrión, el gobierno brasileño se jacta de haber batido un récord histórico en términos de participación de los pueblos indígenas en la COP. Participan cerca de 3000 representantes de comunidades autóctonas, 1000 de los cuales participan directamente en las negociaciones. Sin embargo, este gesto simbólicamente fuerte enmascara las pequeñas ganancias materiales para estas poblaciones. La Coalición Mundial por los Bosques (GFC), que reúne a 144 organizaciones de pueblos autóctonos, [ya denuncia las «falsas soluciones»](#) promovidas por Lula.

De hecho, el TFFF promete que parte de los rendimientos del fondo se donarán a los pueblos autóctonos y las poblaciones locales. Sin embargo, de los 4 dólares por hectárea, solo el 20% se destinará a las comunidades locales, con pagos irregulares. Un informe de la organización Global Forest Coalition (GFC) también expresó su preocupación por el hecho de que la existencia misma de los pueblos originarios no se reconozca dentro de las fronteras nacionales de algunos estados, o que el reconocimiento de sus derechos siga estando sujeto a la buena voluntad de las autoridades. Plantea una pregunta legítima: "[¿Qué significa que 'los bosques permanezcan intactos'? ¿Podrán las comunidades indígenas utilizar madera o llevar a cabo pequeñas deforestaciones para garantizar sus medios de vida? »](#) .

¿Qué margen de maniobra tendrían los inversores para definir el modelo de conservación considerado satisfactorio para liberar los pagos del fondo? Estas preguntas siguen sin respuesta por el momento.

Megaproyecto de explotación petrolera discutido entre bastidores

El Brasil de Lula podría desempeñar un papel fundamental en la transición energética como uno de los principales países productores de petróleo del mundo. La salida de los combustibles fósiles es una demanda central de las organizaciones indígenas y ambientales. Pero la celebración de la COP en la Amazonía acentúa las contradicciones entre el discurso ambientalista de Lula y la búsqueda de políticas basadas en la explotación desenfrenada de los recursos naturales, de la mano de los intereses de los combustibles fósiles y los bancos que los financian. Al margen de los preparativos para la COP, se estuvo planeando un controvertido megaproyecto de explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas.

Con cierta incomodidad, Lula dijo en una [entrevista](#) reciente que quiere explotar el petróleo, pero de manera amigable con el medio ambiente. Un ejercicio difícil, dado que el proyecto tiene como objetivo producir no menos de 14 mil millones de barriles de petróleo, incluso

por parte del gigante petrolero semipúblico Petrobras, que ocupa el puesto 20 entre las empresas que más CO2 generan en el mundo. Según el Instituto ClimaInfo, una explotación petrolera de esta magnitud liberaría 11 mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que representa el 5% del presupuesto de carbono restante para mantenerse por debajo del umbral de 1,5 ° C.

Petrobras tiene la intención de aumentar masivamente su producción y sus sitios de exploración en los próximos cuatro años. Para justificar esta estrategia, Lula moviliza una narrativa de defensa de la soberanía nacional sobre los recursos energéticos. Sin embargo, el desarrollo del sector petrolero está dirigido principalmente a satisfacer el apetito del capital extranjero. Casi el 63% del capital de Petrobras está en manos de inversores privados, dos tercios de los cuales son internacionales. Por lo tanto, aumentar la producción significa generar más ganancias para los inversores extranjeros, al tiempo que consolida la dependencia de la economía brasileña de las exportaciones de oro negro, ahora el principal producto de exportación del país.

La mayor parte del petróleo extraído por Petrobras ya va al exterior, particularmente a Israel, donde se utiliza como combustible y alimenta el esfuerzo bélico. Entre 2023 y 2024 las exportaciones de petróleo a este país aumentaron a la mitad. Señalar este desarrollo explica en parte por qué Lula se posiciona como un acérrimo denunciante del genocidio en Gaza en el escenario internacional, mientras se niega a romper las relaciones comerciales con el régimen de Israel.

La ambivalencia entre un discurso soberanista y la complacencia de Lula hacia el capital extranjero es aún más aguda en el actual programa de privatización, bajo el cual el gobierno ha lanzado subastas de cuencas petroleras terrestres y marinas en la Margen Ecuatorial Amazónica.

El pasado mes de junio se vendieron 146.000 km² de derechos de concesión de hidrocarburos, en su mayoría a gigantes como Galp (Portugal), ExxonMobil (EE.UU.), Equinor (Noruega) o PetroChina (China), que podrán explotar y vender el petróleo. Confiar la producción y comercialización de combustibles responsables de más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero a industrias extranjeras no es una estrategia de soberanía energética, y mucho menos una política para reducir las emisiones.

Otras posibles formas de financiar la conservación

Las organizaciones locales están luchando contra el «desarrollismo fósil» de Lula y el dominio absoluto de las finanzas en la conservación de los bosques con el mismo vigor. Como alternativa al TFFF, la GFC propone asignar el 1% de los presupuestos de defensa nacional de todos los países a la conservación de los bosques tropicales. Para Brasil, esto representaría 226 millones de dólares, o una sexta parte de los 1.300 millones que el país podría recibir del TFFF, suponiendo que la tasa de deforestación se mantenga por debajo del 0,5% y el fondo pueda cumplir con sus compromisos.

Otra opción más ambiciosa sería suspender el pago de la deuda, que actualmente está asfixiando las finanzas brasileñas. El año pasado, el servicio de la deuda absorbió casi 2000 mil millones de reales brasileños (363 mil millones de dólares). ¡Esta cantidad por sí sola

representa casi tres veces la cantidad del TFFF! En 2024 los pagos de la deuda absorbieron el 42% del presupuesto brasileño, mientras que solo el 21% se destinó a pensiones, el 6% a asistencia social, el 4% a salud y solo el 0,3% a gestión ambiental. Suspender los pagos de la deuda es una forma efectiva de liberar recursos para la conservación sin convertirlos en una fuente de ganancias para el mercado financiero.

También es una necesidad para garantizar la transición ecológica «justa» que André Corrêa do Lago pretende poner en marcha.

lecourrier.ch

<https://www.lahaine.org/mundo.php/la-cop30-y-el-dilema-brasileno>